

¿Un nuevo modelo productivo socialista?

# La política borró las buenas intenciones

Nelson Freitez\*

EL PAÍS POLÍTICO



Las buenas intenciones de crear una economía supuestamente socialista, basada en incentivos y créditos estatales y en la idea de que la gente debe trabajar sin incentivos materiales (sino morales), no ha dado resultados

Uno de los pocos consensos existentes en Venezuela en tiempos de las elecciones de 1998 era que la economía venezolana no podía seguir siendo rentista ni continuar sustentada casi exclusivamente en el gasto público. Debíamos convertirnos en una nación productiva para superar la altísima dependencia importadora. Requeríamos con urgencia –materia pendiente durante décadas– desarrollar una agricultura y una industria eficiente y productiva para garantizar nuestra soberanía. Además, la expectativa era conformar una economía sostenible generadora de empleos estables, protegidos y bien remunerados que contribuyeran a la superación de la exclusión social y la pobreza.

El arribo al poder del actual grupo gobernante introdujo en el debate público y las políticas públicas la noción de que tales expectativas de desarrollo debían alcanzarse además superando la explotación de la fuerza laboral, generando redistribución del ingreso y la superación de desigualdades socioeconómicas consustanciales al capitalismo rentístico predominante. A tal fin, se estableció como referente para la definición de las políticas el llamado desarrollo endógeno y la economía social, buscando estimular iniciativas productivas locales y regionales y emprendimientos colectivos de poblaciones desempleadas y empobrecidas.

Sobre todo después del paro petrolero de fines del 2002, el Gobierno nacional emprende un conjunto de políticas destinadas a multiplicar unidades de producción asociativas tanto en el campo como en las ciudades, tratando de crear un sector de economía social para impulsar un desarrollo endógeno propio, desde localidades y regiones. Para esto dispuso de un altísimo volumen de recursos –entre otras iniciativas, para el financiamiento de unas 29.000 cooperativas y empresas de producción social se destinaron más de 1.450 millones de Bs.F.–; se conformó un ministerio –Economía Popular, luego Economía Comunal, hoy suprimido–; se aprobaron leyes y varios decretos; se crearon nuevos fondos de financiamiento; se constituyó una misión

–Vuelvan Caras, luego Che Guevara– y se abrieron las compras del Estado y las contrataciones de servicios a tales nuevas empresas.

El país se pobló de una multiplicidad de sa-raos, fundos zamoranos, cooperativas, núcleos de desarrollo endógeno, empresas de producción social, zonas especiales de desarrollo, iniciativas diversas que tenían en común el carácter asociativo del emprendimiento, el financiamiento estatal y la proveniencia popular de sus integrantes. El Gobierno esperaba que estas diversas unidades productivas se consolidaran para convertirse en embriones del nuevo modelo productivo socialista previsto en el Plan Económico-Social Simón Bolívar 2007-2013.

### LOS CAMBIOS, ¿DÓNDE ESTÁN?

En el libro del ex ministro de Industria y Comercio, Víctor Álvarez –titulado *Venezuela: ¿hacia dónde va el modelo productivo?*– se hace un análisis de tales políticas y de sus resultados. Una de las conclusiones más resaltantes de este trabajo es que midiendo los resultados de las políticas en referencia, en términos de la producción y del empleo generado, sus saldos, después de una década de ejecución, son claramente contradictorios y con un bajísimo impacto transformador sobre la realidad que se aspiraba cambiar. En términos de los aportes al PIB, según datos del Banco Central de Venezuela, se señala que entre 1998-2008 las contribuciones al PIB del sector privado aumentaron de 64.7% a 70.9%, en tanto que los del sector público se redujeron de 34.8% a 29.1% y las del sector economía social apenas pasaron de 0.5% a 1.6%.

Igualmente, en cuanto a la generación de empleo, es en las actividades del sector privado de la nación donde se han creado más puestos de trabajo en el período hasta llegar a ocupar un poco más de 70% de la fuerza de trabajo, en tanto que la economía social solamente aumentó de 1.6% a 1.7% en el empleo del país pasando de 173.922 personas ocupadas a 201.773. Además el libro de Álvarez resalta que los sectores en los cuales ha crecido más el empleo son el comercio y los servicios.

Estos datos constituyen una evidencia sólida en relación a que en Venezuela, en esta década, más que generarse y desarrollarse las bases de un nuevo modelo productivo socialista, lo que se ha estado expandiendo es el sector terciario de la economía privada, fundamentalmente en actividades de distribución de bienes importados adquiridos con las divisas de la renta petrolera inyectadas a la economía vía gasto público.

Unas políticas que teóricamente buscaban cambiar una economía capitalista de carácter rentista terminaron, al cabo de cerca de una década de ejecución de un altísimo e impreciso volumen de millones de dólares, por fortalecer

al comercio importador, el consumo y la banca. Perseguían desarrollar un fuerte y articulado sector de economía social que generara y proveyera a la mayoría de la población de bienes y servicios, y al final tales unidades productivas –en su gran mayoría hoy no existen– se mantienen funcionando con gran precariedad ó subsisten al amparo del subsidio estatal (de más de 325.000 cooperativas registradas en Sunacoop están funcionando menos del 10%).

### ENTRE DISCURSO Y REALIDAD

Se crearon unidades de producción en forma acelerada y masiva, sin preparación técnica-laboral y administrativa adecuada y de calidad para sus integrantes, incentivadas excesivamente por el crédito estatal y sobrefinanciadas por el Gobierno, sin considerar el mercado para sus bienes y servicios y surgidas al calor de intensos procesos de proselitismo político-electoral.

Frente a las altísimas expectativas de empleo, ingresos y mejora de millones de personas excluidas, se les ofreció una rápida conformación de empresas asociativas que surgirían y se consolidarían casi exclusivamente a partir del financiamiento estatal, de las compras del Estado, del otorgamiento de activos, tierras y equipos por parte del Gobierno. Se idearon fantasiosos circuitos de desarrollo endógeno en los cuales, en una especie de trueque entre integrantes de las propias unidades, se producía y se distribuía lo producido a través de intercambios en los cuales no prevalecía el precio y los costos sino una solidaridad artificial inducida por funcionarios públicos sin criterios económicos básicos, ni socialistas ni capitalistas.

Dos elementos pesaron enormemente en los resultados que analizamos. Por un lado, las contradictorias nociones sobre lo que se considera economía socialista y transición al socialismo del siglo XXI. Se transmitió el lineamiento de que tales unidades económicas no debían buscar excedentes –ya que eso las hacía reproducir el capitalismo– sino trabajar al costo, prácticamente hasta descapitalizarse. Dado que sus costos serían subsidiados por el Estado, sus trabajadores no debían buscar mayores ingresos sino concebirse como servidores de las comunidades; es decir, trabajar sin incentivos materiales sino morales.

Por otra parte, el objetivo de tales políticas más que crear un nuevo sector económico alternativo al capitalismo, buscó básicamente consolidar una base política de apoyo electoral para garantizar la continuidad del actual gobierno, lo cual nos puede explicar la improvisación y lo acelerado y masivo de toda la operación gubernamental.

\*Sociólogo.



### LA CONFESIÓN

Una de las cosas más curiosas acaecidas en el ámbito de la política y los medios fue la entrevista que cuatro personas afectas al oficialismo le hicieron a Fidel Castro en los primeros días de agosto. Fue transmitida como una exclusiva por Venezolana de Televisión. El líder de la revolución cubana admitió sin ambages que socialismo y comunismo son la misma cosa. Por cierto, por decir algo semejante el cardenal Jorge Urosa Savino, semanas antes, tuvo que comparecer ante la Asamblea Nacional para dar explicaciones al respecto. Más recientemente, el ex presidente cubano le dijo a un periodista estadounidense que el modelo económico comunista de la isla no funciona. Parece increíble pero lo admitió. Las agencias hablaron de un “infrecuente comentario sobre la situación nacional bajo el gobierno de su hermano Raúl”. Sin embargo, de seguidas Castro se desdijo o desmintió al periodista alegando que hubo un malentendido. “Mi idea, como todo el mundo conoce, es que el sistema capitalista ya no sirve ni para Estados Unidos ni para el mundo”, dijo.

La mala situación de la economía de Cuba no es una novedad y el propio presidente Raúl Castro lo ha admitido en varias ocasiones. Lo cierto es que Jeffrey Gilbert, redactor de la revista *The Atlantic*, le preguntó a Castro si aún valía la pena intentar exportar el siste-

ma económico cubano a otros países y el ex mandatario le respondió: “El modelo cubano ya ni siquiera funciona para nosotros”. Goldberg publicó el extracto en inglés el miércoles 7 de septiembre en el blog que escribe dentro del sitio de la revista. El periodista dijo que Castro hizo el comentario de manera casual mientras almorzaban, luego de una larga conversación sobre el Medio Oriente, y no entró en detalles. El gobierno cubano no quiso hacer declaraciones de inmediato sobre la afirmación del periodista. Desde que dejó el poder en 2006 tras una severa enfermedad, Castro se ha concentrado casi exclusivamente en asuntos internacionales y ha dicho muy poco sobre la política interna, quizás para no dar la impresión de que recorta la autoridad de su hermano. Goldberg viajó a Cuba invitado por el ex presidente, que quería hablar con él sobre un artículo que publicó en *The Atlantic* sobre el programa nuclear iraní.

### ¿OTRA LEY CHUCUTA?

Aunque la Asamblea Nacional estaba a punto de aprobar la ley de desarme en los días en que esta edición se cerraba, sigue sin existir una real voluntad política por aminorar el tráfico de armas en Venezuela. No hay vestigios, en realidad, de que exista una disposición sólida en este sentido. Un artículo del *Correo del Orinoco* lo sentenció con meridiana claridad: “Las estadísticas del Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) informan que hasta los años 80 el 50% del total de delitos se cometió con armas de fuego. Pero hasta 2009 el porcentaje se incrementó a 78%. Tales cifras precipitan una ecuación sencilla: el delito en Venezuela es casi sinónimo de poseer una pistola o un revólver”.

La Asamblea Nacional se movió, hizo algo, pero lo hizo de manera ofuscada y sin consultar a las organizaciones de dere-

chos humanos. Desde hace tiempo, un grupo de organizaciones hizo escuchar su voz de alerta ante la proliferación de armas ilegales en el país. El Manifiesto por el Desarme fue una iniciativa del Centro por la Paz y los Derechos Humanos de la UCV y del Centro Gumilla, suscrita por otras doce organizaciones civiles y con el apoyo de más de 800 firmas. En junio ese manifiesto exhortó a los diputados de la Asamblea Nacional, especialmente a la comisión de Defensa y Seguridad, a que ampliara la consulta y participación popular sobre el proyecto de ley de desarme y control de municiones. No lo hizo. El documento fue entregado al Parlamento y se pidió abrir un mayor compás de discusión sobre esta ley, antes de pasar a su segunda discusión y posterior aprobación en el hemiciclo.

Como ha sucedido otras veces con otras leyes, la AN programó sesiones extraordinarias y sin muchos miramientos. No se atendió a la necesidad de revisar los alcances de esta ley y las propuestas que tenían organizaciones de derechos humanos y comunidades para enriquecerla. Ha habido otras experiencias de políticas en materia de seguridad, como el Consejo Nacional de Reforma Policial (Conarepol), cuyo buen trazo lo marcó su amplia consulta y las diversas voces que colaboraron en su construcción (y sin embargo su propuesta final fue engavetada). En este caso la ley de desarme y control de municiones ha debido ser ejemplo de consenso nacional. Se debió evitar la premura por presentar acciones sobre seguridad en época electoral. En fin, habrá ahora que revisarla, ya que en materia de desarme en realidad no impone norma, sino sobre el control. Ojalá haya oportunidad, en esta nueva etapa que inicia el parlamento, de revisarla.

